

Restituir las confianzas

Ignacio Irrarrázaval

Centro de Políticas Públicas UC



En sociedades complejas, el desarrollo, la cohesión y el bienestar social no dependen solo del Estado o del sector privado. Fundaciones, corporaciones y organizaciones territoriales acompañan, complementan y muchas veces anticipan la acción estatal. Son actores que operan en la intersección entre política pública y la implementación de proyectos que se traducen en apoyos reales para niños, personas mayores, familias vulnerables o personas con discapacidad.

El denominado caso Convenios reveló fallas graves sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil que debían investigarse y corregirse. Pero también instaló una sospecha más amplia sobre esta colaboración. La reacción fue comprensible: comisiones, mayores exigencias de control y proyectos de ley. Sin embargo, el debate quedó tensionado entre polos que no necesariamente se excluyen: más regulación o más colaboración, más fiscalización o mayor autonomía.

Más allá de esta tensión, la evidencia

muestra que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol significativo en la provisión de bienes públicos y en la generación de capital social.

Un informe del proyecto Sociedad en Acción del Centro de Políticas Públicas UC estima que el trabajo de las fundaciones beneficia a más de 5,5 millones de personas al año —tres de cada diez habitantes del país—, con niveles de cobertura especialmente altos en población vulnerable: el 42% de quienes viven en la pobreza y más del 90% de las personas en situación de calle acceden a iniciativas de organizaciones sociales.

El estudio también muestra que este aporte tiene un despliegue territorial amplio. Además, el 56% de las iniciativas se desarrolla en comunas cuyo índice de pobreza multidimensional supera el promedio nacional.

A esto se suma su rol en la implementación de políticas públicas. Las organizaciones de la sociedad civil participan en la ejecución de aproximadamente uno de cada tres programas públicos ter-

cerizados, contribuyendo a ampliar la cobertura de intervenciones en ámbitos como niñez, educación y apoyo a poblaciones vulnerables.

El desafío no consiste en optar entre control y confianza, sino en diseñar instituciones que hagan compatibles ambas dimensiones. Una sobreregulación fragmentada basada en la presunción generalizada de irregularidad puede terminar debilitando la acción de estas organizaciones.

Desde el Centro de Políticas Públicas hemos entregado pro-

puestas concretas al próximo gobierno: avanzar hacia un registro único interoperable, simplificar y hacer más coherentes los mecanismos de rendición de cuentas, establecer exigencias diferenciadas según tamaño y naturaleza jurídica, y fortalecer la colaboración público-privada.

Fortalecer la transparencia es indispensable. Pero fortalecer la confianza también lo es. Y ambas tareas pueden —y deben— avanzar juntas en el ciclo político que comienza.

“Fortalecer la transparencia es indispensable. Pero fortalecer la confianza también lo es”.